

Santiago, ocho de febrero de dos mil veintitrés.

VISTOS Y OÍDOS:

PRIMERO: *De la demanda.* En estos autos comparecen don JUSTO CRISTIAN GUTIERREZ BLANCO, cédula nacional de identidad número 12.117.383-2, Presidente del **SINDICATO DE TRABAJADORES N°1 DE LA EMPRESA COBRE CERRILLOS S.A**, R.S.U. 13.090.090, y don SERGIO CARLOS JAQUE MUÑOZ, cédula nacional de identidad número 10.184.416-1, Tesorero del SINDICATO DE TRABAJADORES N°1 DE LA EMPRESA COBRE CERRILLOS S.A, en representación de ERNANDO MIGUEL NOURDIN MENESES, cédula nacional de identidad número 11.872.238-8, WALTER EDUARDO ALVAREZ VILLALÓN, cédula nacional de identidad número 17.399.488-5, RICHARD SOTO GÓMEZ, cédula nacional de identidad número 9.507.842-7, EDUARDO CATALÁN MORALES, cédula nacional de identidad número 10.388.187-0, JUAN JEREZ ARCE, cédula nacional de identidad número 8.633.199-3, LUIS REYES AGUILERA, cédula nacional de identidad número 10.686.632-5, FRANCISCO MORENO SANHUEZA, cédula nacional de identidad número 13.459.501-9, PATRICIO HIDALGO PAREDES, cédula nacional de identidad número 10.467.910- 2, JUAN CARLOS MUÑOZ RIVERA, cédula nacional de identidad número 9.562.647-5, EDUARDO FARIAS GUAJARDO, cédula nacional de identidad número 14.301.797-4, JUSTO CRISTIAN GUTIÉRREZ BLANCO, cédula nacional de identidad número 12.117.383-2, HERNÁN OSORIO DÍAZ, cédula nacional de identidad número 7.535.559-9, HERNÁN VALLADARES GONZÁLEZ, cédula nacional de identidad número 10.057.038-6, ALBERTO MANCILLA JARA, cédula nacional de identidad número 8.090.862-8, CLAUDIO ENRIQUE CONTRERAS ARAVENA, cédula nacional de identidad número 13.338.405-7, ARTURO CORTÉS ARAYA, cédula nacional de identidad número 8.535.929-0, MARCELO MALDONADO ASTUDILLO, cédula nacional de identidad número 10.364.373-2, LEONEL EDUARDO NEIRA



SANDOVAL, cédula nacional de identidad número 9.004.443-5, OSCAR BORIS MORA CELIS, cédula nacional de identidad número 7.810.054-0, JUAN GUILLERMO OSORIO DÍAZ, cédula nacional de identidad número 8.191.435-4, RODOLFO CARO CASTILLO, cédula nacional de identidad número 11.473.768-2, FRANCISCO MONTENARES VERA, cédula nacional de identidad número 13.837.057-7, JUAN CARLOS MATELUNA VALLADARES, cédula nacional de identidad número 9.875.455-5, IVÁN ESPINOZA GUAITIAO, cédula nacional de identidad número 12.341.225-7, CÉSAR HUENULLÁN CÁRDENAS, cédula nacional de identidad número 15.649.378-3, ANDRÉS RAMIREZ ORTIZ, cédula nacional de identidad número 8.714.405-4, JUAN LUIS SAAVEDRA CAÑETE, cédula nacional de identidad número 13.082.852- 3, CRISTIAN RAMIREZ VALENZUELA, cédula nacional de identidad número 12.647.108-4, MAURICIO VALLADARES ANGULO, cédula nacional de identidad número 16.630.058-4, JAIME CORNEJO AHUMADA, cédula nacional de identidad número 11.333.948-9, SERGIO CARLOS JAQUE MUÑOZ, cédula nacional de identidad número 10.855.750-8, LUIS PIZARRO CARDOZA, cédula nacional de identidad número 11.837.808-3, CLAUDIO SAEZ ORELLANA, cédula nacional de identidad número 12.236.130-6, JAVIER RAMIREZ RODRIGUEZ, cédula nacional de identidad número 9.856.766-6, MARCO CONTRERAS SIERRA, cédula nacional de identidad número 9.871.876-1, JUAN ROSS CARQUÍN, cédula nacional de identidad número 7.477.719-8, CÉSAR OCTAVIO SOTO CUEVAS, cédula nacional de identidad número 9.032.910-3, FELIPE ANDRÉS PÉREZ GÓMEZ, cédula nacional de identidad número 13.437.047-5, JUAN MARCOS CLAVIJO ESPINOZA, cédula nacional de identidad número 9.831.065-7, JUAN PABLO MASIAS PÉREZ, cédula nacional de identidad número 13.491.124-7, ELKIN DARIO RIVERA ALVARADO, cédula nacional de identidad número 24.159.930-2, HÉCTOR IVÁN JERIA ESPINOZA, cédula nacional de identidad número 9.014.712-9, FABIÁN ANDRÉS CORREA GONTUPIL, cédula nacional de



identidad número 17.248.868-4, FRANCISCO ROJAS URBINA, cédula nacional de identidad número 11.339.926-0, SERGIO ANTONIO BAEZA VERA, cédula nacional de identidad número 9.850.941-0, JOSÉ VASQUEZ VALENZUELA, cédula nacional de identidad número 13.464.453-2, MIGUEL ANGEL LANDEROS OSTRIA , cédula nacional de identidad número 17.254.439-8, FRANCISCO GÁTICA GONZÁLEZ, cédula nacional de identidad número 19.239.603-4, ISAAC VIDELA SALAZAR, cédula nacional de identidad número 17.281.594-4, BENJAMÍN MUÑOZ CID, cédula nacional de identidad número 19.134.730-7, BASTIÁN PEREIRA MALEBRÁN, cédula nacional de identidad número 16.618.442-8, JULIO ROJAS VEGA, cédula nacional de identidad número 11.847.900-9, LUIS MATURANA CONTALBA, cédula nacional de identidad número 16.352.622-0, CARMEN NAVARRETE FUENTES, cédula nacional de identidad número 18.732.637-0, EDISON FARFAL ALEMANIS, cédula nacional de identidad número 13.441.200-3, EDWARD AVILES MIRANDA, cédula nacional de identidad número 13.935.148-7, CARLOS ACUÑA HIGUERA, cédula nacional de identidad número 10.923.096-0, ERNESTO CONCHA MORA, cédula nacional de identidad número 9.403.761-1, JORGE DEVIA CATALÁN, cédula nacional de identidad número 10.895.914-2, ALEX CARRILLOS SANDOVAL, cédula nacional de identidad número 17.837.714-0, NELSON AVENDAÑO BURGOS, cédula nacional de identidad número 10.499.230-7, GERARDO CAÑAS TORREALBA, cédula nacional de identidad número 26.235.954-9, ALCIDES FERNÁNDEZ SARAIVA, cédula nacional de identidad número 15.887.035-5, todos socios del Sindicato, domiciliados para en Av. Pedro Aguirre Cerda N°6111, Cerrillos; e interponen demanda en Procedimiento de Aplicación General, por Cobro de Prestaciones, en contra de la **empresa COBRE CERRILLOS S.A.**, persona jurídica de derecho privado, Rol Único Tributario 91.449.000-6, representada legalmente por don ALDO ESTAY BASAURE, ignoran profesión u oficio, cédula



nacional de identidad número 12.638.990-6, ambos domiciliados en Avenida Pedro Aguirre Cerda N°6307, Cerrillos.

Argumentan que la demandada no ha cumplido con las obligaciones del contrato colectivo celebrado entre las partes, de fecha 8 de agosto de 2018, pues no ha pagado en la oportunidad correspondiente, y de forma íntegra, las prestaciones a las que se encuentra obligada.

Así las cosas, avanzan en explicar que el contrato colectivo vigente ya referido, contempla dos cláusulas que sustentan el incumplimiento alegado, estas son, la cláusula vigésimo tercera que regula la gratificación legal y la cláusula décimo tercera relativa a la participación de utilidades.

Respecto a la primera de las cláusulas aludidas, que regula la gratificación legal, explican que, según los datos que arrojaron las juntas de accionistas de los años 2019, 2020 y 2021, la empresa sí tuvo utilidades líquidas en los ejercicios de 2018, 2019 y 2020, por lo que correspondía -según el tenor de la cláusula- pagarle a los trabajadores la gratificación según lo dispuesto en los artículos 46 y siguientes del Código del Trabajo; optando por cualquiera de los sistemas que la ley prevé. Con todo, indican que, de acuerdo a los libros de remuneraciones exhibidos por la demandada, es posible constatar que la empresa no pagó las gratificaciones de los años indicados (2019, 2020 y 2021). De ahí que solicitan que se declare que existe la deuda a favor de los trabajadores por dichos conceptos.

En cuanto a la cláusula décimo tercera de participación de utilidades, ésta se encuentra pactada en los siguientes términos, a saber:

“La Compañía otorgará, a los trabajadores (as) afectos al presente instrumento colectivo, una participación de utilidades bajo las siguientes condiciones y supuestos:



- a) *La Compañía otorgará entre todo su personal, una participación de utilidades de un 10%. La utilidad que se considerará para estos efectos, será aquella utilidad final consignada en el balance de la Compañía aprobado por Junta General de Accionistas, rebajado el impuesto a la renta y cualquier otro tipo de cargo contra los resultados del ejercicio, habida consideración de lo siguiente:*

La Compañía mantendrá, durante el período de vigencia del presente Contrato Colectivo, el beneficio de participación de utilidades, en base al mismo procedimiento y factores aplicados, en el año 1983 para determinar este beneficio. Esto es, utilidades antes de Impuestos, determinados en el balance según el resultado de éste, menos la tasa de impuestos a la renta que afectaba a esta utilidad en el citado año. Esta tasa era de un 40% y su origen correspondiente al impuesto de tasa adicional del artículo 21 de la Ley de la Renta (DL 824).

La Ley N°18.682 publicada en el Diario Oficial con fecha 31 de diciembre de 1987, introdujo una serie de modificaciones a la Ley de la Renta. En lo pertinente al beneficio sobre la participación de utilidades, se modificó el artículo N°58 de la referida Ley, rebajando desde un 40% a un 35% el impuesto que afecta el reparto de utilidades de los nuevos inversionistas extranjeros que no tengan residencia ni domicilio en Chile.

Como consecuencia de lo anterior, y mientras no se produzcan otras modificaciones a esta materia, se considerará para efectos de la determinación de las utilidades que sirven de base para aplicar los beneficios de la presente cláusula, un 35% de impuesto para aquella proporción que representan los accionistas extranjeros sobre el total de acciones de la Compañía.



En todo caso, es acuerdo de las partes, que si por cualquier razón fuere modificado el impuesto a la renta o cualquier otro impuesto sobre las utilidades para los efectos a que se refiere la presente cláusula, considerará también esa modificación.

No obstante, lo convenido en los párrafos precedentes, quedarán excluidas y, en consecuencia, no se considerarán para el cálculo de la participación referida, las utilidades o pérdidas provenientes de empresas filiales, relacionadas, coligadas o cualesquiera otras, en cuyo capital o utilidades Cobre Cerrillos S.A., tenga participación.

b) El monto total que resulte de la aplicación del mencionado porcentaje de 10% sobre las utilidades determinadas en la forma antes señalada, se repartirá entre todos los trabajadores que tengan más de 9 meses de antigüedad en la Compañía al 31 de diciembre de cada año.

c) La distribución se hará por un mismo monto, sin relación a las remuneraciones de cada trabajador.

d) A los trabajadores que, a la fecha de su retiro hubieren prestado servicio a la Compañía sólo durante parte del año calendario respectivo y que tengan a lo menos 2 años de antigüedad en la misma, la participación le será pagada a prorrata de los meses en que hubieren estado en servicio efectivo.

e) Esta participación de utilidades será pagada dentro de los 30 días de aprobado el balance por la Junta General de Accionistas y según las disponibilidades de Caja.

f) Se deja expresamente establecido que esta participación será imputable a cualquier régimen de participación de utilidades que por ley u otra disposición obligatoria fuera aplicable al personal y que no sea la gratificación legal establecida en el presente Contrato Colectivo. En el evento de que por disposición legal o convencional o de cualquier otro



orden, se estableciere un sistema de participación de utilidades, en forma que resulte más favorable para los trabajadores, esta Compañía modificará el contrato suscrito en este acto, para ajustarlo a las nuevas normas obligatorias correspondientes.

Sin embargo, es entendido que, en ningún caso, esta participación podrá mantenerse y ser pagada en forma paralela a un régimen, sea legal o de otro origen, por lo que el aquí se estipula cesará automáticamente tan pronto se establezca por ley u otra disposición obligatoria un sistema de participación.

g) Se reafirma que la obligación que implica para la Compañía este beneficio alcanza sólo al 10% de las utilidades finales determinadas en la forma antes indicada. Por lo tanto, en el monto a distribuir y pagar, se entienden incluidos los incrementos previsionales”.

Pues bien, respecto a la precitada cláusula sobre participación en las utilidades, los actores explican que, de acuerdo a la forma en la que se encuentra redactada, es en parte meramente potestativa, y por ello su aplicación no puede utilizar la expresión “y cualquier otro tipo de cargo contra los resultados del ejercicio”. Ello, pues es utilizado de forma arbitraria por la demandada para rebajar la base imponible.

En tal sentido, señalan que se les ha descontado, respecto de los años 2018, 2019 y 2020, conceptos genéricos y arbitrarios, sin otorgar ninguna explicación contable o detalle. Así, por ejemplo, aseveran que en el año 2020 se les indicó que la suma de \$537.480.533 debían ser deducidos de la determinación de utilidades, bajo el concepto de “otros”. A lo anterior, se le suma que no ha entregado los comprobantes de liquidaciones conforme el artículo 54 bis del Código del Trabajo. De ahí que sostienen la obligación se torna nula, desde que la demandada decide si pagarles o no, incluyendo en el cálculo valores genéricos.



Así, explican que debería estar solamente a la utilidad neta, aplicándole una tasa impositiva del 35%, y luego el 10% de ello constituiría la participación.

En razón de lo expuesto, previas citas legales, solicitan que se acoja la demanda y se declare el derecho de los demandantes, en tanto socios de SINDICATO DE TRABAJADORES N°1 DE LA EMPRESA COBRE CERRILLOS S.A., a percibir las remuneraciones devengadas, que no ha solucionado la demandada, y cuya fuente es el contrato colectivo celebrado entre las partes, con fecha 8 de agosto de 2018, respecto a “cláusula vigésimo tercera: gratificación legal”, y en parte en la “cláusula décimo tercera: participación de utilidades”.

Asimismo, que una vez declarado tal derecho, se sienten las bases de las deudas por gratificaciones y participación, a objeto de determinar el monto que se adeuda a cada uno de los actores respecto a las remuneraciones devengadas, que no han sido solucionadas, por los periodos indicados, otorgando, para el caso de la gratificación, el derecho a la empresa COBRE CERRILLOS S.A. de opción, que deberá manifestarse en la contestación de la demanda, y en caso de negativa a hacerlo se proceda a sentar las bases por el Tribunal, de conformidad al artículo 47 o 50 del Código del Trabajo.

A su turno, solicitan que sentada las bases, tanto para gratificaciones como participación, excluyendo en este último caso los conceptos que no ajusten a utilidad neta, y que constituyan una obligación meramente potestativa, se proceda a ordenar que la demanda, dentro de un plazo de 5 días, o el que se establezca por el Tribunal, se pague a cada uno de los actores la deuda que resulte de las bases determinadas, debidamente actualizada. Todo lo anterior, con reajustes, intereses y costas.

SEGUNDO: *De la contestación.* A folio 44 comparece don JORGE ANTONIO CANALES GONZÁLEZ, abogado, en representación de **COBRE CERRILLOS SOCIEDAD ANÓNIMA (“COCESA”)** y contesta la demanda.



En primer término, controvierte y niega todos y cada uno de los hechos expuestos por la contraria en su demanda, toda vez que afirma que ellos no se ajustan a la realidad.

Explica que su representada en los años 2018, 2019 y 2020 no obtuvo utilidad líquida, para efectos del pago de gratificación legal. En ese sentido, explica que los demandantes tuvieron a su disposición, en virtud de la medida de exhibición de documentos con que se inició el juicio, los balances a 8 columnas de los años 2018, 2019 y 2020. Añade que en la última página de cada uno de dichos balances se indica los resultados de los respectivos ejercicios (antes de impuestos). Así las cosas, ahonda en señalar que la empresa en dichos ejercicios obtuvo resultados negativos en dólares americanos de (USD\$2.256.005,9), de (USD\$93.770,6) y de (USD\$724.057,3), respectivamente para los años 2018, 2019 y 2020; por lo que los trabajadores demandantes no tuvieron derecho al pago de la gratificación legal, desde que no existió utilidad líquida, de acuerdo a la definición legal de aquella, y que difiere de los conceptos contables de utilidad financiera o utilidad neta.

Para el caso de la cláusula sobre participación de utilidades, contenida en los instrumentos colectivos vigentes, señala que su representada calculó correctamente y, en consecuencia, repartió de forma íntegra los montos por concepto de 10% de utilidades, los que ascendieron a \$153.328.404, para el año 2018; \$245.976.072, para el año 2019 y; \$234.761.183, para el año 2020.

Afirma que los demandantes tuvieron a disposición la información contable, en concreto los balances de los años indicados, los que indicaban los resultados de los respectivos ejercicios antes de impuestos, a saber: USD\$1.186.423,66 (un millón ciento ochenta y seis mil cuatrocientos veintitrés coma sesenta y seis dólares) para el año 2018; USD\$3.679.944,03 (tres millones seiscientos setenta y nueve mil novecientos cuarenta y cuatro coma cero tres dólares) para el año 2019



y USD\$3.438.225,54 (tres millones cuatrocientos treinta y ocho mil doscientos veinticinco coma cincuenta y cuatro dólares) para el año 2020. Asimismo, los F22 o formularios de declaración de impuestos anuales a la renta (moneda extranjera) de los años tributarios 2018, 2019, 2020 respectivamente, que arrojaban una base imposible del IDPC de USD\$2.936.951,21 respecto del ejercicio 2018; fue de USD\$5.151.273,47 para el ejercicio 2019; y fue de USD\$6.178.875,45 para el ejercicio 2020.

Así las cosas, indica que dicha información contable era suficiente para que los demandantes descartaran la hipótesis de que la demandada habría obtenido las utilidades netas indicadas en la demanda, las que controvierte. Por añadidura, precisa que su representada se encuentra autorizada por el Servicio de Impuestos Internos, mediante Resolución Exenta N°543 de 23 de diciembre de 2014, a llevar la contabilidad en dólares norteamericanos.

Avanza en explicar, respecto del bono de participación de las utilidades que, de acuerdo a cómo se encuentra pactada en el contrato colectivo, su representada ha aplicado rigurosamente las normas de la cláusula que transcribe. De ahí que refiere que no es efectivo que haya rebajado arbitrariamente, de mala fe o sin fundamento la base de cálculo del beneficio o haya introducido la resta de partidas improcedentes. De esta forma, en concreto señala que los montos a repartir entre todos los trabajadores de su representada con derecho al beneficio fueron: a) Para el año 2018 \$153.328.404; b) Para el año 2019 \$245.976.072 y; c) Para el año 2020 \$234.761.183.

Añade que los demandantes sustentan el cálculo erróneo que le imputan en el concepto “Otros ingresos (egresos)” practicado en el año 2020, ascendente a \$537.480.333. Sin embargo, precisa que dicha partida está respaldada por el balance de 8 columnas de dicho año. A modo ejemplar señala que dentro de ese concepto están los siguientes conceptos: N° de Cuenta Balance N201100101



Stock option expenses Group, N° de Cuenta Balance M301060101 Revenues from Mission Out-Group, N° de Cuenta Balance N401010101 Gains on metal derivatives open contracts-Group y N° de Cuenta Balance N401020101 Losses on metal derivatives- open contracts-Group.

Por añadidura, sostiene que los actores nada indican del hecho que dicho descuento ya se había realizado con antelación, significando una suma de \$582.879.424 para el año 2018 y \$36.845.495 en 2019.

De ahí que, reitera que en los años 2018, 2019 y 2020 se repartió íntegramente el monto que correspondía al 10% de las utilidades, sobre la base de un monto único para cada trabajador que haya laborado 12 meses y una cantidad proporcional al tiempo trabajado, para los que se desempeñaron menos del año completo, con exclusión de aquellos con menos de 9 meses laborados en el año. En consecuencia, afirma que no existe saldo a favor de ninguno de los trabajadores y demandantes de autos.

En efecto, la demandada asevera que el libelo se sustenta en realidad en un aprovechamiento indebido de un lamentable error, relativo a las utilidades informadas en las juntas de accionistas. Al respecto, indica que su representada jamás ha obtenido las millonarias utilidades, después de aplicados los impuestos, que se indican tanto en la demanda como en la junta de accionistas; y que ello es posible constatar del contraste con la información contable y financiera acompañada en estos autos. Avanza en explicar que el error en las juntas de accionistas se debió a un yerro al expresar el monto de las utilidades, aplicándose la expresión “M\$” como “millones de dólares”, en lugar de “miles de dólares”; pero que, con todo, en los número 6 de cada una de las actas de las juntas de accionistas se da cuenta que ésta aprobó la cuenta del Presidente, la Memoria y el Balance de la sociedad y el informe de los auditores externos; y que dichos balances dan cuenta de los verdaderos resultados del ejercicio.



Por añadidura, refiere que aun con el error ya indicado en la junta de accionistas, no debe soslayarse la naturaleza de dichas actas, según lo regula la Ley de Sociedades Anónimas. Así las cosas, según lo prevé el inciso primero del artículo 77 de la referida ley “La junta de accionistas llamada a decidir sobre un determinado ejercicio, no podrá diferir su pronunciamiento respecto de la memoria, balance general y estados de ganancias y pérdidas que le hayan sido presentados, debiendo resolver de inmediato sobre su aprobación, modificación o rechazo y sobre el monto de los dividendos que deberán pagarse dentro de los plazos establecidos (...)”; de ahí que la junta solo debe pronunciarse sobre el balance, ya sea aprobándolo, modificándolo o rechazándolo y en el caso de autos, los balances referidos a los años 2018, 2019 y 2020 (que dan cuenta de un resultado diferente e inferior) fueron aprobados, por lo que mal podría el acta alterar los resultados de los balances. Ello, porque según se desprende de la norma indicada, la mención de las utilidades o pérdidas que se haga en el acta de una junta de accionistas no resulta esencial, ni es un requisito de validez de la misma. Por consiguiente, de existir un conflicto – como en la especie por evidente inadvertencia o error- entre el acta de la junta que los aprueba y los estados financieros, debe estarse a los éstos.

Por añadidura opone excepción de compensación, respecto de cualquier suma a que eventualmente pudiese ser condenada a pagar a cada uno de los actores por concepto de participación de utilidades, dicha excepción es, respecto de cada uno de los demandantes, por la suma de \$3.190.451. Salvo respecto de los siguientes actores: El demandante Ernesto Concha Mora, contra quien se opone excepción de compensación por \$3.129.775; el demandante Jorge Devia Catalán, por la suma \$2.462.338; el demandante Alex Carrillo Sandoval, por la suma \$2.462.338; y el demandante Nelson Avendaño Burgos, contra quien se opone excepción de compensación por \$1.191.144. Lo anterior, por cuanto dichas sumas fueron pagadas a los demandantes por concepto de participación de



utilidades devengadas en los años 2018, 2019 y 2020, y las deudas recíprocas son líquidas y actualmente exigibles.

Por último, opone excepción de falta de legitimación pasiva, respecto de la demandante doña Carmen Navarrete Fuentes, cédula nacional de identidad número 18.732.637-0, puesto que la actora no es y nunca ha sido trabajadora dependiente de su representada.

En razón de lo expuesto, solicita tener por contestada la demanda y rechazarla en todas sus partes, con costas. En subsidio, en caso que se dé lugar a la demanda, solicita acoger la excepción de compensación y de falta de legitimación pasiva opuestas.

TERCERO: Del llamado a conciliación. El Tribunal en la audiencia preparatoria llamó a conciliación, la que no se produjo.

CUARTO: De las excepciones. La parte demandada, en su contestación de la demanda, opuso excepción de falta de legitimación respecto de doña Carmen Navarrete Fuentes; y de compensación. El Tribunal confirió traslado a la parte demandante para contestar, y ésta se allanó a la falta de legitimación respecto a Carmen Navarrete, y solicitó el rechazo de la compensación, con costas.

El Tribunal resolvió, atendido el allanamiento, acoger la excepción de falta de legitimación y dejó la resolución de la excepción de compensación para la sentencia definitiva.

QUINTO: De la convención probatoria. Las partes en la audiencia preparatoria dejaron constancia que el sindicato -debidamente informado respecto al capital propio de la empresa- no insistirá en la acción en cuanto se refiere a la declaración del derecho a percibir gratificaciones, continuando respecto de la participación de utilidades.



De ahí que la controversia queda circunscrita solamente respecto a la pretensión relativa a la cláusula que establece el derecho a la participación de utilidades.

SEXTO: De los hechos a probar. Atendidas las alegaciones de ambas partes, se fijaron los siguientes hechos controvertidos, a saber: 1) Términos y condiciones en que se encuentra pactado, en el contrato colectivo vigente, la participación de utilidades. 2) Si se cumplen los requisitos que hacen procedente la participación en utilidades. En su caso, si la demandada adeuda alguna suma de dinero por este concepto.

SÉPTIMO: De la prueba de la parte demandante. La parte demandante en la audiencia de juicio acompañó la siguiente prueba documental: 1) Contrato Colectivo entre el SINDICATO DE TRABAJADORES N° 1 de la EMPRESA COBRE CERRILLOS S.A. y la empresa COBRE CERRILLOS S.A. de fecha 8 de agosto del año 2018. 2) Acta de Junta Ordinaria de Accionistas N°69 de COBRE CERRILLOS S.A. de 25 de abril de 2019. 3) Acta de Junta Ordinaria de Accionistas N°70 de COBRE CERRILLOS S.A. de 9 de abril de 2020. 4) Acta de Junta Ordinaria de Accionistas N°71 de COBRE CERRILLOS S.A. de 30 de abril de 2021. 5) Declaración de Impuestos Anuales de COBRE CERRILLOS S.A., del año 2018. 6) Declaración de Impuestos Anuales de COBRE CERRILLOS S.A., del año 2019. 7) Declaración de Impuestos Anuales de COBRE CERRILLOS S.A., del año 2020. 8) Balance 2018 de la demandada. 9) Balance 2019 de la demandada. 10) Balance 2020 de la demandada.

Incorporó asimismo el oficio emitido por el Banco Central.

A su turno, evacuó dentro del plazo legal y compareció la perito doña Ximena Cabello Herrera, de especialización perito contable-tributario-auditor y evacuó el informe pericial contable.



En cuanto a su declaración, luego de identificarse y exponer sus credenciales y experiencia académica, se le solicitó que explicara lo relativo a los valores de las utilidades de la compañía demandada, según su análisis.

Explicó que su peritaje estuvo basado en cuatro miradas. La primera dice relación con los balances tributarios, a fin de chequear dicha información. Señala que se tuvo en consideración el rubro de la empresa, porque si bien las partidas pueden ser muy similares, el rubro influye en ciertas particularidades técnicas. Por otro lado, se hizo una revisión general de los estados financieros auditados, respecto de la información que éstos reflejaban. Se hizo también un cruce de información, a objeto de validar que todos los antecedentes fueren consistentes. También se hizo ello con las determinaciones tributarias, puesto que el objeto de la pericia decía relación con inversiones, por tanto, las determinaciones tributarias influyen y hacen ciertos ajustes asociados a estas partidas. De ahí que era relevante poder observarlas a fin de determinar la consistencia entre la información de los balances, los estados financieros y esta información tributaria.

Por último, con un objeto de reconocimiento, también se examinaron las juntas de directorio de accionistas, dado que siempre incorporan párrafos asociados a sus inversiones y también sobre los estados financieros que son validados. El estudio sobre esto se hizo para establecer que existieren dichos reconocimientos (en la junta de accionistas) e identificar si es que se hablaba de algún elemento importante que tuviera relación o implicancia dentro de estos informes.

Expone que con todos los antecedentes a la vista se hicieron dos análisis de manera individual. Posteriormente, se hizo un comparativo de antecedentes para chequear que los resultados fueren equivalentes. Estos son los que se muestran al final en la conclusión, individualizados paso a paso, con el objeto de dar certeza de la información y que ésta fuera coherente.



Explica que existen diferencias menores, alrededor de 7 dólares, que se justifican plenamente por aproximaciones o por conversiones de dólares a pesos, que son propios del cálculo procedimental normal.

Avanza en señalar que los resultados los expone al final, en dólares y pesos, para los efectos de este juicio. Así, en el informe al final, en las conclusiones, luego del análisis comparado expone lo que sigue:

“Resultado de la empresa COCESA para los años 2018, 2019 y 2020, excluyendo la utilidad o pérdida provenientes de empresas filiales, relacionadas, coligadas u otras en que la empresa tenga participación; obteniendo los siguientes resultados, a saber:

- 2018: 1.170.642,64 millones de dólares
- 2019: 3.617.484, 43 millones de dólares
- 2020: 3.202.809,35 millones de dólares

Asimismo, en conversión a pesos chilenos, los resultados son los siguientes:

- 2018: 813.327.387
- 2019: 2.708.555.292
- 2020: 2.277.037.307

Se le consultó por si esa utilidad, indicada en el informe, se encuentra depurada y que significa aquello. Explica que sí está depurada y que eso significa que son las utilidades menos los resultados provenientes de otras empresas en las que la demandada tiene participación. Añade que lo que se hizo fue establecer cuánto es esta utilidad, reconocida dentro de los estados financieros, y a ese resultado total se le descontó esa partida a fin de dejar la utilidad propia del negocio.

Señala que la utilidad indicada en el informe, es con los impuestos incluidos y que ello se elaboró con la información que se acordó en la audiencia de reconocimiento, aun cuando se solicitó información adicional, que también detalla el informe pericial; en la primera parte del informe.

Por último, se le consulta si bajo su conocimiento profesional como perito es esa la utilidad ajustada para los años que se indican, ya descontados los impuestos, a lo que responde que sí.

En el contra examen se le consultó por si, dentro del análisis realizado, se encontró con alguna materia, algún asiento contable o alguna información que no tuviera sustento; a lo que la perito contesta que la pericia estaba enfocada a lo que precisamente se le solicitó, por lo que se enfocó en recopilar los antecedentes que fueren necesarios para llevarlas a cabo.

Con todo, refiere que la información entregada era coherente, consistente y por eso es que hizo esa revisión, para chequear y comprobar lo fehaciente de la información contable.

Se le consulta respecto a la información adicional relativa a Colada Continua S.A., respecto de los años 2018, 2019 y 2020, al respecto indica que lo arrojado por Colada Continua eran utilidades. De ahí que en el balance de COCESA está reconocida como un ingreso, por lo que posteriormente fueron deducidos. Al respecto, ahonda en señalar que hay un efecto que puede llamar la atención, desde un punto de vista tributario, porque se hacen rebajas que quedan expresados como si fueran saldos negativos, pero eso dice relación solo con la forma en la que se expresan los estados financieros.

Ahora bien, cuando se determina la participación, se tomaron los resultados, se hicieron los análisis, se sacaron las participaciones (es decir, la



información respecto de empresas donde tiene participación COCESA), del 41% y los resultados eran positivos.

Reitera que respecto de Colada Continua dicha participación estaba contabilizada positivamente, es decir, era mejor el resultado del balance con dicha participación.

Finalmente, reitera las utilidades consignadas en la conclusión del informe.

Por último, la parte demandante solicita la exhibición de documentos a la parte demandada respecto de lo siguiente: 1) Liquidaciones de remuneraciones de cada uno de los representados de la organización sindical y, especialmente de acuerdo al inciso 3° del artículo 54 bis del Código del Trabajo, el anexo de las mismas, en que se detalle la operación de la participación pagada y la forma empleada para su cálculo; correspondiente a los años 2019, 2020 y 2021; 2) Libro de remuneraciones de los años 2018, 2019 y 2020; 3) Contratos de Trabajo, de todos los trabajadores, que prestaron funciones el año 2019 para la demandada, y finiquitos celebrados dicho año; 4) Contratos de Trabajo, de todos los trabajadores, que prestaron funciones el año 2020 para la demandada, y finiquitos celebrados dicho año; 5) Contratos de Trabajo, de todos los trabajadores, que prestaron funciones el año 2021 para la demandada, y finiquitos celebrados dicho año; 6) Libro de accionistas de COBRE CERRILLOS S.A. 2019 al año 2021, si estuvieran divididos por años.

La parte demandante da por cumplida la exhibición respecto de los documentos n°3, 4 y 5; y solicita se haga efectivo el apercibimiento legal respecto del documento número 1 (liquidaciones de remuneraciones, en particular lo relativo a lo previsto en el artículo 54 bis del Código del Trabajo); y el n°2 relativo a los libros de remuneraciones.



OCTAVO: De la prueba de la parte demandada. En la audiencia de juicio la parte demandada acompañó la siguiente prueba documental: 1) Balance General COCESA año 2018; 2) Balance General COCESA año 2019; 3) Balance General COCESA año 2020; 4) Autorización SII contabilidad COCESA en dólares; 5) Actas Juntas de Accionistas COCESA años 2019, 2020 y 2021; 6) F22 de COCESA años tributarios 2019, 2020 y 2021; 7) Liquidaciones Remuneraciones Participación Utilidades año 2018; 8) Liquidaciones Remuneraciones Participación Utilidades año 2019; 9) Liquidaciones Remuneraciones Participación Utilidades año 2020; 10) Libro de Remuneraciones COCESA enero 2018; 11) Libro de Remuneraciones COCESA febrero 2018; 12) Libro de Remuneraciones COCESA marzo 2018; 13) Libro de Remuneraciones COCESA abril 2018; 14) Libro de Remuneraciones COCESA mayo 2018; 15) Libro de Remuneraciones COCESA junio 2018; 16) Libro de Remuneraciones COCESA julio 2018; 17) Libro de Remuneraciones COCESA agosto 2018; 18) Libro de Remuneraciones COCESA septiembre 2018; 19) Libro de Remuneraciones COCESA octubre 2018; 20) Libro de Remuneraciones COCESA noviembre 2018; 21) Libro de Remuneraciones COCESA diciembre 2018; 22) Libro de Remuneraciones COCESA año 2018, por participación utilidades; 23) Informe Auditores Externos COCESA 2017-2018; 24) Informe Auditores Externos COCESA 2018-2019; 25) Informe Auditores Externos COCESA 2019-2020; 26) Acta Sesión Directorio N°459 COCESA; 27) Acta Junta Extraordinaria COCESA 24-09-2018; 28) Email de 04-01-2022 respuesta SII a COCESA; 29) Contrato Colectivo suscrito entre la demandada y el SINDICATO DE TRABAJADORES N°1 DE LA EMPRESA COBRE CERRILLOS S.A., de 8 de agosto de 2018; 30) Contrato Colectivo suscrito entre la demandada y el SINDICATO DE TRABAJADORES N°2 DE COBRE CERRILLOS S.A., de 7 de agosto de 2018; 31) Estado Declaración Renta COCESA 2019, según SII; 32) Estado Declaración Renta COCESA 2020, según SII; 33) Estado Declaración Renta COCESA 2021, según SII; 34) Libro de Remuneraciones COCESA año



2019, por participación utilidades; 35) Libro de Remuneraciones COCESA año 2020, por participación utilidades.

Asimismo, en cuanto a la testimonial, declararon debidamente juramentados los siguientes testigos: 1) Maritza Pineda Ocando; 2) Enrique Manuel Montano Puchalt; y 3) Desiree García Estrada.

Doña Maritza Pineda Ocando señala que trabaja en la empresa demandada y es la gerente de administración y finanzas desde septiembre de 2018. En razón de su puesto, conoce la existencia del contrato colectivo y también de la cláusula contenida en él, relativa a la participación de las utilidades.

Consultada por cómo se calcula la utilidad que da origen a ese bono, explica que el cálculo se parte de lo que son los ingresos y los gastos, luego se le descuentan gastos administrativos y financieros, eso da una utilidad antes de impuesto; luego se le aplica el impuesto y ahí se obtiene la utilidad neta. Añade que para el cálculo de la participación se considera la utilidad antes de impuesto, a la que se le aplica el 35% del impuesto a las utilidades para los accionistas extranjeros y eso da la base de lo que se reparte a los trabajadores (su 10%).

Indica que en el año 2018, recuerda que los montos involucrados eran los siguientes: utilidad antes de impuesto un aproximado de 3.395.000 dólares; a eso se le aplicó el 35% del impuesto y se llegó a una utilidad base de 1.533 mil dólares aproximadamente, de los que se repartió el 10% a los trabajadores, lo que fue 153.000.000 aproximadamente.

En 2019 la utilidad antes de impuesto fueron un aproximado de 5.054.000 dólares, al que se le aplicó también el impuesto de 35% y eso arrojó una base de 2.400.000.000 millones y el 10% fue a repartir un aproximado de 245.000.000 millones de pesos.



Por último en 2020, la utilidad antes de impuesto fue un aproximado de 5.080.000 dólares aproximadamente, luego del 35% del impuesto a la inversión extranjera, arrojó \$2.340.000.000 y a repartir fueron aproximadamente 234.000.000.

Explica que la contabilidad de COCESA se lleva en dólares, de este modo la conversión a pesos se hace una traducción cuando se cierran los libros al 31 de diciembre, utilizando el tipo de cambio del día 31 de diciembre del año que se está cerrando.

En cuanto a la fórmula indicada para calcular el bono, precisa que el monto final a repartir del año 2018, se refiere a 153.000.000 de pesos. Explica que ellos tienen que informar a recursos humanos el valor, pero la conversión ya está fijada cuando hacen los estados financieros auditados, ahí se fija el tipo de cambio que se utiliza, ahí se transforma a pesos y se informa en pesos a recursos humanos para que haga los trámites.

Consultada por si conoce cuál es la operación que realiza Recursos Humanos con la información entregada por año, señala que recursos humanos hace un cálculo en la segunda quincena de marzo, cuando deben hacer la declaración de impuestos de los trabajadores. Indica que recursos humanos toma el monto que le señala finanzas, el valor a repartir, hacen una revisión de las personas que estén activas e inactivas de la compañía, analizan el tiempo que trabajaron (porque debe tener al menos 9 meses de antigüedad o en su defecto 2 años si la persona ya no está, y se paga proporcional).

Precisa que no recuerda cuál es el monto exacto que recibió un trabajador que laboró los 12 meses en la empresa, por concepto del bono de participación en las utilidades.



Consultada por las actas de junta de accionistas, señala que en ellas se hace la aprobación del balance. Respecto de los años 2018, 2019 y 2020, indica que se aprobaron los informes de auditores que establecen la utilidad, pero se reflejó en millones de dólares. De ahí que se tuvo que hacer una corrección, porque era miles de dólares y parecía que eran millones de dólares. Precisa que no recuerda en qué años exactamente ocurrió el mencionado error, pero cree que fue para los 3 años, 2018, 2019 y 2020.

En el contra examen se le consulta por las operaciones que refirió debía hacer recursos humanos, en concreto si conoce en detalle aquellas. Al respecto indica que el detalle que se hizo en relación a cada uno de los trabajadores lo desconoce, pero sí conoce el esquema general.

Consultada por cómo entonces saben los trabajadores cuál es el valor a pagar, precisa que la empresa le notifica al trabajador cuánto va a recibir. Añade que no sabe si se le notifica el cálculo, porque no le constan dichas notificaciones.

Don Enrique Manuel Montano Puchalt declaró en síntesis que trabaja para la empresa demandada y es el jefe de personal desde hace 10 años. En razón de su función, sabe que siempre ha existido un instrumento colectivo con el sindicato n°1. Respecto de los años 2018, 2019, 2020, sabe que existe el bono sobre participación de las utilidades.

Señala que dicha cláusula es conocida como la participación de utilidades y consta de que el 10% de las utilidades es repartida entre todos los trabajadores proporcionalmente al tiempo trabajado durante el año. Ese monto a repartir se lo informa el área contable, una vez revisados los estados financieros. Ese monto -según consta en el contrato colectivo- nace de la utilidad líquida antes de impuesto, luego se deduce el 35% de los accionistas y a ese monto se le saca el 10%. Ese 10% es el monto a repartir.



Precisa que el 10% se aplica sobre el saldo, es decir, se consideran las utilidades antes de impuesto y a esa se le deduce el 35% del impuesto a los accionistas. El 10% del saldo es lo que se reparte entre los trabajadores.

Agrega que una vez que finanzas le informa el monto a repartir, es él quien hace el cálculo. Explica que toma la base de todos los trabajadores que estuvieron contratados durante el año anterior y determina un factor en relación al tiempo trabajado por cada uno de ellos. Antes de eso, debe determinar cuáles trabajadores, según el contrato colectivo, pueden acceder a este bono; para ello deben cumplirse dos premisas, a saber, 1) el trabajador debe haber laborado 9 meses en el ejercicio del año; o 2) si estuvo menos de 9 meses, haber tenido dos años de antigüedad al minuto de su salida de la compañía.

Con ese filtro accede a la nómina de los trabajadores que pueden acceder a dicho bono. Luego, debe revisar cuánto es el tiempo trabajado en el año por cada uno.

La base de todos los trabajadores le da un factor a dividir el monto a repartir. Por ejemplo, si le da 83.000 días, eso lo divide por el monto a repartir y le da el valor día; luego ese valor día lo multiplica por el tiempo laborado por cada trabajador.

El tiempo que debe considerarse por cada trabajador es el tiempo según contrato, no se deducen días de vacaciones, licencias médicas o algún otro ausentismo.

Para el año 2018, recuerda que el monto que le indicó finanzas que debía repartir por concepto de ese bono era de \$153.328.000, y las personas que tuvieron derecho al bono fueron aproximadamente 224. El monto se distribuyó entre 176 personas que tuvieron el período completo y 48 personas que tuvieron



proporcional. La persona que tuvo derecho al bono completo recibió el monto de \$728.000 para el 2018.

En 2019 el monto a repartir informado por finanzas fue \$245.976.000. A ese bono accedieron 203 personas, de esas 182 tuvieron el bono completo y 21 personas recibieron proporcional. El bono completo en 2019 fue de \$1.276.000 bruto.

Finalmente, en 2020 el monto a repartir fue de \$234.761.000, los que recibieron fueron 209 trabajadores; 180 lo percibieron de forma completa y 29 que tuvieron proporcional. El monto para el bono completo en 2020 fue de \$1.191.000.

Consultado por cómo recursos humanos informa a los trabajadores que tendrán derecho a percibir el bono de participación de utilidades y su monto; señala que hablan con los sindicatos una vez que están los montos ya establecidos, le informan los montos. Asimismo, indica que después bajan esa información a través de un comunicado general. En ese comunicado se informa el monto total de la utilidad a repartir y luego se arma una tabla para que “el trabajador tenga más o menos una relación de cuánto es lo que va percibir cada uno”. Sale el comunicado con esta información. Esa tabla contiene el tiempo trabajado, “por ejemplo dice por tiempo trabajado y cuál es el monto bruto al que puede acceder cada uno, para que más o menos tenga una idea de cuánto va a recibir”. Precisa que por monto trabajado se refiere a “por 12 meses tanto, 11 meses tanto y así” y que es solo referencial, no aparece el nombre del trabajador; es solo un monto referencial, porque después el trabajador puede acceder su liquidación individual en la que aparece el monto procesado.

Explica que esa tabla se informa a los trabajadores porque sale un comunicado, por los canales de comunicación, a través de correo electrónico, o Whatsapp; esa es la forma en que se baja la información.



Agrega que el trabajador individualmente se informa del monto a recibir por el comunicado masivo al que hizo alusión, que contiene la tabla referida; y luego accede a su liquidación individual en el que se plasma el monto bruto. La liquidación contiene el monto bruto, luego los impuestos y leyes sociales y el monto líquido a pago.

En el contra examen se le consultó por qué día se le pagó a los trabajadores en 2020 el bono. Explica que tienen un calendario anual de pago de remuneraciones, pero no recuerda el día específico.

Asevera que todos los trabajadores que están prestando servicios sí tienen contrato de trabajo.

Asimismo, explica que la tabla que refirió no se adjunta a las liquidaciones, sino que solo se incluye en el comunicado.

Por último, declaró doña Desiree García Estrada quien expuso en suma que trabaja para la demandada, es jefa contable y tiene conocimientos sobre el bono de participación en las utilidades.

Explica, respecto al procedimiento, que se parte del estado de resultados y éste comprende la utilidad antes de impuestos y a ese se le calcula un 35%. Sobre esa base en 2018 tuvo un monto aproximado de 1.533.000.000 pesos chilenos. Esa fue la base de participación, la que se manda a recursos humanos, a don Enrique Montano y él es el encargado de hacer los cálculos que le corresponde a cada trabajador.

CONSIDERANDO:

NOVENO: *Del quid de la controversia.* De forma preliminar, debe dejarse asentado con claridad cuál es el *quid* de lo discutido por ambas partes en la especie. Al respecto, cabe recordar que en virtud de la convención probatoria



celebrada en la audiencia preparatoria -según da cuenta el motivo quinto- la demandante no insistió en la acción relativa a la declaración del derecho a percibir gratificaciones. En efecto, lo discutido quedó circunscrito solamente a la pretensión relativa a la cláusula que establece el derecho a la participación de utilidades.

Para el análisis de la cláusula décimo tercera, que regula el bono de participación de utilidades, es menester exponer y analizar cuál es la teoría del caso planteada por la parte demandante. Así las cosas, de una lectura armónica de la demanda -que incluía también la pretensión desistida respecto a las gratificaciones- es posible desprender que lo planteado por el sindicato sugiere dos líneas argumentativas. La primera de ellas, dice relación con el valor de la utilidad líquida de la compañía, la que contrastada con lo informado por las actas de accionistas, no coincide con el monto pagado por la empresa por concepto de bono; asimismo, como segundo argumento, que los términos en los que se encuentra redactada la cláusula relativa a la participación en las utilidades importa, en parte, una obligación meramente potestativa de parte del empleador, al incluir la frase “cualquier otro tipo de cargo contra los resultados del ejercicio”, para efectos de determinar las utilidades respecto de las que se obtendrá el 10% a repartir entre los trabajadores beneficiarios.

A su turno, la parte demandada al contestar la demanda indicó que las utilidades señaladas, tanto en la junta de accionistas como en el libelo, no son efectivas y que ello se debió a un yerro involuntario y evidente. En base a ello estructura su tesis, desde que expuso que los términos del contrato son claros y el procedimiento ha sido aplicado de forma correcta por la empresa, de tal manera que el bono de participación en las utilidades ha sido pagado de forma íntegra.

Así las cosas, la controversia relativa a la cláusula décimo tercera del contrato colectivo que liga a ambas partes, está circunscrita a los términos de su



redacción, y a cuál es la utilidad final de los ejercicios 2018, 2019 y 2020 de la empresa demandada.

En razón de lo expuesto, y al tenor del primer hecho controvertido fijado, se analizará primeramente los términos en los que se encuentra pactado el bono en el contrato.

DÉCIMO: *De los términos de la cláusula.* Según se viene de señalar, a la luz del primer hecho controvertido, se analizará primeramente los términos y condiciones en los que se encuentra pactado el bono de participación de utilidades.

Pues bien, no es un hecho controvertido que entre las partes se ha celebrado un contrato colectivo en 2018, el que contiene en su cláusula décimo tercera el bono de participación de utilidades, en los siguientes términos (según da cuenta la documental aportada por ambas partes), a saber:

“La Compañía otorgará, a los trabajadores (as) afectos al presente instrumento colectivo, una participación de utilidades bajo las siguientes condiciones y supuestos:

- a) La Compañía otorgará entre todo su personal, una participación de utilidades de un 10%. La utilidad que se considerará para estos efectos, será aquella utilidad final consignada en el balance de la Compañía aprobado por Junta General de Accionistas, rebajado el impuesto a la renta y cualquier otro tipo de cargo contra los resultados del ejercicio, habida consideración de lo siguiente:*

La Compañía mantendrá, durante el período de vigencia del presente Contrato Colectivo, el beneficio de participación de utilidades, en base al mismo procedimiento y factores aplicados, en el año 1983 para determinar este beneficio. Esto es, utilidades antes de Impuestos, determinados en el



balance según el resultado de éste, menos la tasa de impuestos a la renta que afectaba a esta utilidad en el citado año. Esta tasa era de un 40% y su origen correspondiente al impuesto de tasa adicional del artículo 21 de la Ley de la Renta (DL 824).

La Ley N°18.682 publicada en el Diario Oficial con fecha 31 de diciembre de 1987, introdujo una serie de modificaciones a la Ley de la Renta. En lo pertinente al beneficio sobre la participación de utilidades, se modificó el artículo N°58 de la referida Ley, rebajando desde un 40% a un 35% el impuesto que afecta el reparto de utilidades de los nuevos inversionistas extranjeros que no tengan residencia ni domicilio en Chile.

Como consecuencia de lo anterior, y mientras no se produzcan otras modificaciones a esta materia, se considerará para efectos de la determinación de las utilidades que sirven de base para aplicar los beneficios de la presente cláusula, un 35% de impuesto para aquella proporción que representan los accionistas extranjeros sobre el total de acciones de la Compañía.

En todo caso, es acuerdo de las partes, que si por cualquier razón fuere modificado el impuesto a la renta o cualquier otro impuesto sobre las utilidades para los efectos a que se refiere la presente cláusula, considerará también esa modificación.

No obstante, lo convenido en los párrafos precedentes, quedarán excluidas y, en consecuencia, no se considerarán para el cálculo de la participación referida, las utilidades o pérdidas provenientes de empresas filiales, relacionadas, coligadas o cualesquiera otras, en cuyo capital o utilidades Cobre Cerrillos S.A., tenga participación.

b) El monto total que resulte de la aplicación del mencionado porcentaje de 10% sobre las utilidades determinadas en la forma antes señalada, se



repartirá entre todos los trabajadores que tengan más de 9 meses de antigüedad en la Compañía al 31 de diciembre de cada año.

c) La distribución se hará por un mismo monto, sin relación a las remuneraciones de cada trabajador.

d) A los trabajadores que, a la fecha de su retiro hubieren prestado servicio a la Compañía sólo durante parte del año calendario respectivo y que tengan a lo menos 2 años de antigüedad en la misma, la participación le será pagada a prorrata de los meses en que hubieren estado en servicio efectivo.

e) Esta participación de utilidades será pagada dentro de los 30 días de aprobado el balance por la Junta General de Accionistas y según las disponibilidades de Caja.

f) Se deja expresamente establecido que esta participación será imputable a cualquier régimen de participación de utilidades que por ley u otra disposición obligatoria fuera aplicable al personal y que no sea la gratificación legal establecida en el presente Contrato Colectivo. En el evento de que por disposición legal o convencional o de cualquier otro orden, se estableciere un sistema de participación de utilidades, en forma que resulte más favorable para los trabajadores, esta Compañía modificará el contrato suscrito en este acto, para ajustarlo a las nuevas normas obligatorias correspondientes.

Sin embargo, es entendido que, en ningún caso, esta participación podrá mantenerse y ser pagada en forma paralela a un régimen, sea legal o de otro origen, por lo que el aquí se estipula cesará automáticamente tan pronto se establezca por ley u otra disposición obligatoria un sistema de participación.

g) Se reafirma que la obligación que implica para la Compañía este beneficio alcanza sólo al 10% de las utilidades finales determinadas en la



forma antes indicada. Por lo tanto, en el monto a distribuir y pagar, se entienden incluidos los incrementos previsionales”.

El tenor de la cláusula, en suma, implica que la compañía otorga un bono de participación de las utilidades, bajo las siguientes condiciones:

- 1) Se reparte entre los trabajadores beneficiarios el 10% de las utilidades. Para la determinación de dicha utilidad debe considerarse aquella “utilidad final” consignada en el balance de la compañía, aprobada por la Junta General de Accionistas. A ello, debe rebajársele el impuesto a la renta “y cualquier otro tipo de cargo contra los resultados del ejercicio”.
- 2) Para el cálculo del impuesto, la empresa se obliga a realizarlo en base al porcentaje vigente al año 1983, cual es el 35% de impuesto para aquella proporción que representan los accionistas extranjeros sobre el total de acciones de la Compañía.
- 3) Para el cálculo de la utilidad, no se considerarán las utilidades o pérdidas provenientes de empresas relacionadas, es decir, filiales, relacionadas, coligadas o cualesquiera en cuyo capital o utilidades la empresa demandada tenga participación.
- 4) El monto que resulte de la aplicación del porcentaje del 10% se distribuye entre los trabajadores que tengan más de 9 meses de antigüedad en la empresa al 31 de diciembre de cada año.
- 5) Dicha distribución se hace por un mismo monto, sin considerar las remuneraciones de los trabajadores.
- 6) Los trabajadores que hubieren prestado servicios solo durante una parte del año y que tengan a lo menos 2 años de antigüedad en la compañía, recibirán la participación a prorrata de los meses en que hubieren prestado servicio efectivo.

- 7) El bono se pagará dentro de los 30 días siguientes de aprobado el balance por la Junta General de Accionistas.
- 8) El monto que se pague por este concepto es imputable a cualquier otro régimen que se establezca por ley de participación de utilidades, que no sea la gratificación legal.
- 9) Por último, se reafirma que el beneficio solo alcanza al 10% de las utilidades finales, por lo que se entienden ahí incluidos los incrementos previsionales.

Así las cosas, para la determinación de la utilidad a repartir debe considerarse aquella “utilidad final” consignada en el balance de la compañía, aprobada por la Junta General de Accionistas. A ello, debe rebajársele el impuesto a la renta “y cualquier otro tipo de cargo contra los resultados del ejercicio”.

Entonces lo primero es determinar la “utilidad final” consignada en el balance aprobado por la junta general de accionistas. Al respecto, según dio cuenta la parte demandada en su contestación, y fue demostrado a través del cotejo de información entre las actas de accionistas y los instrumentos contables, en concreto los balances de la compañía; es posible tener por acreditado que los montos descritos en las Actas de Juntas de Accionistas no se condecían con la realidad. De este modo, resulta evidente que en aquellos instrumentos se expresó en miles de millones de dólares, lo que en realidad eran millones de dólares. De esta forma, si bien la Acta N°69 establece que la utilidad neta de 2018 fue de 1.186 millones de dólares; lo cierto que tras el cotejo de la información contable ésta fue de 1.186.423,66 dólares, según el resultado final del ejercicio; mientras la Acta N°70 arrojaba una utilidad neta, después de impuestos, para el 2019 de 3.677 millones de dólares; el resultado final de dicho ejercicio, según la documental aportada por la demandada, fue de 3.674.133,67 dólares; y, por



último, según el Acta N°71, las utilidades neta de 2020 fueron 3.440 millones de dólares, mientras el balance indicó la suma de 3.438.225,54 dólares.

Así, al ser un error evidente en la transcripción y conversión de las utilidades, en las Actas de Juntas de Accionistas, se estará a lo expuesto en los balances, habida consideración la naturaleza jurídica de dichos instrumentos, según lo prevé la Ley N°18.046 sobre Sociedades Anónimas, en particular lo dispuesto en su artículo 77.

A su turno, conviene precisar que la parte demandante incorporó un informe pericial cuyo objeto era precisamente determinar cuál es la utilidad de la empresa demandada, depurando o descontando aquellas utilidades o pérdidas de empresas relacionadas. Esto, según lo dispone el párrafo final de la letra a) de la cláusula décimo tercera en análisis. Al respecto, resulta relevante dejar asentada que los resultados que arrojó el examen de la perito, la que accedió a los balances, Formularios F-22 y a informes de Auditores externos de COCESA para los años 2017, 2018, 2019 y 2020; no son diametralmente diferentes a los que recién se vienen de enunciar -y también a los indicados en la contestación que si bien son similares, no coinciden de forma exacta con los resultados de los ejercicios-. De esta manera, la conclusión respecto a la utilidad, ya aplicados los impuestos, descontando la información relativa las empresas relacionadas, es la siguiente:

1. Año 2018: 1.170.642,64 millones de dólares.
2. Año 2019: 3.617.484, 43 millones de dólares.
3. Año 2020: 3.202.809,35 millones de dólares.

En razón de lo que se viene de exponer, es posible descartar la primera alegación vertida en la demanda por los actores, y que decía relación con la diferencia en la utilidad final, desde que se ha acreditado que las expresadas en

las Juntas de Accionistas se encontraban erradas. Cabe precisar que si bien existen diferencias en lo consignado por la perito y lo indicado de forma textual en los balances, la misma perito indicó -al momento de exponer su informe- que dichas diferencias eran menores y se podían explicar al cambio o algún otro ajuste en los ejercicios; pero que no resultaban esenciales.

Ahora bien, quedando asentado el hecho de que no existe mayor discrepancia en el cálculo de la “utilidad final”; corresponde continuar con el análisis de la fórmula dada por la literalidad de la cláusula. De este modo, obtenida que fuere la “utilidad final”, corresponde descontarle los conceptos indicados para llegar a la cifra final a repartir, que es la informada por finanzas a recursos humanos, según explicaron los testigos de la demandada de forma conteste.

Con todo, la fórmula a la luz de las probanzas aportadas se desdibuja, de tal manera que no existe prueba alguna tendiente a explicar cómo o por qué se pasa, por ejemplo en 2018 de la suma de 1.170.642,64 dólares de utilidad final a \$153.328.404 pesos chilenos a repartir entre todos los trabajadores, cifra indicada no solo en la contestación, sino por el testigo el Sr. Montano y así aparece reflejada en el documento denominado “Libro participación de utilidades año 2019”, ello entendiendo que las utilidades del año 2018, fueron pagadas en el año 2019. Lo mismo acontece en 2019, en donde la utilidad final es de 3.617.484, 43 dólares y el monto a repartir, según las mismas probanzas ya indicadas fue de \$245.976.054 pesos; y en 2020 que la utilidad fue de 3.202.809,35 dólares y el monto total a repartir entre los trabajadores beneficiarios fue de un monto de \$234.761.183 pesos.

Lo anterior, tiene gran relevancia en concordancia con la segunda alegación realizada por la parte demandante y que dice relación con que la cláusula es en parte meramente potestativa.



Pues bien, como se advirtió con antelación, no ha quedado claro cómo es que se calcula el monto final a repartir entre los trabajadores, y ello proviene de dos razones, a saber:

La redacción de la cláusula es ambigua

En primer término, debe tenerse presente que según el sentido natural y obvio de las palabras, y de acuerdo a la definición otorgada por el DLE, lo ambiguo es aquello que puede entenderse de varios modos o admitir distintas interpretaciones y dar, por consiguiente, motivo a dudas, incertidumbre o confusión. Así, la redacción empleada en la cláusula cumple con las características recién dadas, desde que la expresión abierta “*y cualquier otro tipo de cargo contra los resultados del ejercicio*”, sí admite diferentes interpretaciones, desde que no queda determinado con claridad cuáles son esos otros cargos; y más aún, si dentro de la expresión “cualquier” efectivamente puede incluirse *cualquier cargo* sin límite.

En razón de lo expuesto, debe determinarse el sentido y alcance de dicha cláusula, utilizando las reglas de interpretación contractual. Para efectos de dicha tarea hermenéutica, se estará a las reglas que otorga el legislador en los artículos 1560 y siguientes del Código Civil, en su título XIII sobre interpretación de los contratos; todo ello en armonía con los principios que informan la disciplina.

Así las cosas, debe necesariamente descartarse la primera regla prevista por el legislador en el referido artículo 1560, desde que la controversia de autos deja en evidencia que no se encuentra “claramente conocida la intención de los contratantes”, según se viene de explicar. De ahí que se estará a la norma contemplada el artículo 1566 del Código Civil, en relación a la regla *in dubio pro operario*, que deriva del principio protector. De esta manera, “(...) las cláusulas



ambiguas que hayan sido extendidas o dictadas por una de las partes, sea acreedora o deudora, se interpretarán contra ella, siempre que la ambigüedad provenga de la falta de una explicación que haya debido darse por ella”. En la especie, si bien el contrato colectivo proviene de una negociación colectiva llevada a cabo por el sindicato y la parte empleadora, ello no implica que el empleador deje de ser el contratante con mayor poder negociador y, por tanto, quien estaba en la obligación de otorgar una explicación de la que deriva ahora la cláusula ambigua. Lo anterior, desde que la negociación colectiva -manifestación de la libertad sindical- no elimina la desigualdad de base existente en la relación laboral. De esta forma, era la parte empleadora quien debía otorgar una explicación en el texto contractual de cómo se obtendrían esos cargos contra los resultados del ejercicio, aportando parámetros al menos para su determinación.

Cabe destacar además que analizada de forma completa la cláusula, no existe, en parte alguna, elementos que permitan determinar claramente cómo o cuáles serán aquellos cargos.

Por lo expuesto, en atención a lo previsto en el artículo 1566 del Código Civil, la cláusula ambigua deberá ser interpretada a favor del acreedor, en este caso, el sindicato.

Con todo, como se advirtió en la especie no ha quedado clara la fórmula de cálculo por dos razones, siendo la primera de ellas la redacción ambigua, que se viene de analizar, y luego por la aplicación práctica, según se expondrá, a saber:

La aplicación práctica de la cláusula ha devenido en una obligación que depende de la sola voluntad del obligado

Si bien se ha de tener presente que el contrato colectivo es uno de carácter solemne, según prevé el artículo 320 del Código del Trabajo y, por tanto, su



interpretación en base a la aplicación práctica ha de ser limitada; en estos autos permite ilustrar cómo la vaguedad en la redacción de la cláusula ha devenido – en la práctica- en una obligación que depende, finalmente, de la sola voluntad de la parte empleadora.

Lo anterior, porque del caudal probatorio acompañado, es posible dar cuenta que no existe claridad respecto a la aplicación práctica que ha realizado la parte demandada. En concreto, no se ha ilustrado de forma clara cómo la parte empleadora ha calculado y pagado el bono de participación de las utilidades en los años 2018, 2019 y 2020. Ello, pues como ya se había señalado con antelación, si bien ha quedado demostrado en estos autos que no existe mayor discrepancia en relación al monto bajo el concepto de “utilidad final”; la fórmula posterior a ello no ha sido clarificada. En ese sentido, resulta legítimo cuestionarse ¿cuáles son los elementos que se han descontado y que ha permitido llegar a la cifra final?

De la prueba aportada por la parte demandada es posible extraer los resultados finales según los balances y que ya se han consignado. Esto es: 170.642,64 dólares de utilidad final en 2018; 3.617.484, 43 dólares en 2019; y 3.202.809,35 dólares en 2020, las que se condicen a grandes rasgos con lo informado por la perito. Pero luego, según explican latamente los testigos se realizan descuentos.

Según la literalidad de las declaraciones de los testigos, solo se les descontaría lo correspondiente al 35% de impuesto de aquella proporción que representan los accionistas extranjeros sobre el total de la compañía, según reza la cláusula. Al respecto, llama la atención que ninguno de los testigos de la demandada haga mención a los “otros egresos” enunciados en la contestación y que finalmente constituye el aspecto central de la teoría del caso de la demandante, esto es, que dentro de dichos conceptos la empresa ha incluido cifras bajo conceptos genéricos y arbitrarios.



Finalmente, no queda claro cuáles son los conceptos que ingresan en “otros egresos” y, en definitiva, cuáles son los descuentos aplicados, en general, por la parte empleadora. Ante ello, debe mencionarse que, si bien en la contestación se señala que el monto por “otros egresos” se encuentra justificado en los balances, en el escrito solo se realiza una referencia a modo ejemplar, de tal manera que no se explica ni se otorga ningún parámetro que permita determinar, con exactitud, si el cálculo está correctamente realizado y si entonces calzan los números, según los descuentos. Asimismo, conviene señalar que los balances acompañados en estos autos no poseen el timbre del Servicios de Impuestos Internos, situación reparada además por la perito y que no se contradice con lo expuesto por aquella en el contra examen, en cuanto declaró que no advirtió mayores inconsistencias en los instrumentos contables analizados. Ello, pues debe recordarse que el objeto de la pericia no era determinar los conceptos descontados dentro de “otros egresos”; sino determinar la utilidad final, descontando las utilidades o pérdidas de las empresas relacionadas, esto es, un paso anterior en la fórmula de la cláusula.

Pues bien, abona la conclusión de que ninguna probanza aportó la parte empleadora para demostrar cómo realiza el cálculo, los mismos dichos de los testigos, quienes por una parte la Sras. García y Pineda, quienes trabajan en el departamento de finanzas, replican en su declaración el salto lógico; es decir, exponen la utilidad antes de impuestos y luego el monto a repartir en pesos chilenos. En este punto conviene precisar que a partir de la documental ha quedado acreditado que la empresa demandada se encuentra autorizada para llevar su contabilidad en dólares estadounidenses, sin embargo, ello no es óbice a exponer, ante el Tribunal y principalmente antes los trabajadores, el cálculo de cómo se obtiene la cifra final a repartir. Por su lado el Sr. Montano, al trabajar en Recursos Humanos, solo recibe la cifra final ya determinada por finanzas. Al respecto, es preciso advertir que de la exhibición de documentos y de la declaración del Sr. Montano ha quedado demostrado que jamás se les entregó a



los trabajadores, ni tampoco se acompañó como prueba, el anexo de liquidación previsto en el artículo 54 bis del Código del Trabajo.

Es menester señalar que dicha norma se encuentra dentro del título de la protección a las remuneraciones, por lo que su omisión no resulta baladí como ha planteado la parte demandada. En ese sentido, el legislador le impone la obligación al empleador no solo de informar el monto final a pagar (como lo hizo con las liquidaciones acompañadas y también con los denominados “libro de participaciones”); sino que debe adjuntar el detalle de cada operación que le dio origen y la forma empleada para su cálculo. En esa línea, es menester señalar que la no exhibición de dichos anexos de liquidación de remuneraciones, no obligan a esta magistratura a hacer efectivo el apercibimiento, en orden a determinar que la base de cálculo está errada (apercibimiento que no se hará efectivo). Sin embargo, la no exhibición de dicho anexo, debido a que ha quedado demostrado que dichos instrumentos obligatorios no existen ni nunca le fueron proporcionados a los trabajadores, le permite concluir a este Tribunal que la obligación finalmente sí quedaba al arbitrio del empleador, desde que incluía “otros egresos” bajo la frase genérica y ambigua de la cláusula, sin otorgar ninguna explicación a los trabajadores de cómo se llegó a su cálculo.

En relación a lo que se viene de exponer, ha de reiterarse que no se acompañó ninguna probanza que explicara el cálculo realizado por el empleador, sino que éste solo se encuentra enunciado en la contestación de la demanda, pero del análisis de todos los instrumentos, incluso de lo señalado por los testigos, no queda claro qué conceptos y cuánto monto se descontaba de la utilidad final. Por añadidura, el testigo el Sr. Montana, quien trabaja en el departamento de recursos humanos, fue claro en señalar que no se le entregaba información individual a los trabajadores; sino que se realizaba a través de un comunicado que se enviaba por correo o WhatsApp y que incluía una tabla meramente referencial, para que -en



palabras del testigo- “el trabajador tenga más o menos una idea de cuánto es lo que va percibir cada uno”.

Asimismo, las dos testigos restantes -como ya se esbozó- si bien poseían mayores conocimientos de finanzas en razón de sus puestos de trabajo, solo indicaron cuáles eran las utilidades finales -las que se condicen con lo señalado en el balance- y luego el monto a repartir en pesos chilenos a la totalidad de los trabajadores beneficiarios, replicando la falta de explicación que se halla en todo el caudal probatorio; desde que se cuenta con la utilidad final consignada en el balance, aprobada por la Junta de accionistas, depurada en términos de extraer las utilidades o pérdidas de las empresas relacionadas, y luego está el monto final a repartir; sin existir probanzas tendientes a demostrar de forma clara qué, cómo y cuánto se le descontó a la base de la utilidad final.

Por añadidura, es posible constatar que tampoco se explicó, a través de probanzas, lo relativo al 35% de impuestos para aquella proporción que representan los accionistas extranjeros sobre el total de la compañía; desde que al menos con la documental aportada, esto es, el libro de accionistas de los años 2018, 2020 y 2021, no aparecen accionistas extranjeros.

Según lo que se viene de razonar, es posible tener por constatado que la cláusula décimo tercero del contrato colectivo de 2018 no solo es una redactada en términos ambiguos, de tal manera que implica dudas o puede admitir distintas interpretaciones; sino que la frase “*y cualquier otro tipo de cargo contra los resultados del ejercicio*” torna indeterminada la obligación, desde que el monto a pagar final depende de la sola voluntad de quien se ha obligado, esto es, del empleador. Ello, pues el monto a repartir dependerá de la condición de que existan estos “otros egresos” o “cualquier otro tipo de cargo”, pero quién determina tales egresos es precisamente la parte empleadora, sin otorgar mayor explicación al respecto, lo que pugna además con el principio de buena fe que ha de informar



todo el iter contractual, incluyendo por cierto su ejecución. De ahí que, según dispone el artículo 1478 inciso primero del Código Civil, esto es, “Son nulas las obligaciones contraídas bajo una condición potestativa que consista en la mera voluntad de la persona que se obliga”, la cláusula en aquella parte que incluye la expresión “*y cualquier otro tipo de cargo contra los resultados del ejercicio*”, es nula y, por tanto, no puede tener aplicación práctica. Lo anterior, pues de entender lo contrario, no solo pugnaría con el principio protector y su regla *in dubio pro operario* ya tratada con antelación; sino que dejaría al mero arbitrio de la parte empleadora -y deudora- la determinación de lo que ha de pagar, sin que se otorgue en la misma cláusula o en el contrato en general, parámetros para su determinación, lo que no denota una voluntad seria de obligarse.

Por lo expuesto, se accederá a lo solicitado en la demanda, solo en cuanto se declara la nulidad de aquella obligación por ser meramente potestativa, dependiente de la voluntad de quien se obliga (del empleador). Así las cosas, la base de cálculo utilizada para el pago del bono ha de considerar el 10% de la “utilidad final” consignada en el balance de la compañía, aprobada por la Junta General de Accionistas y a ello, debe rebajársele el impuesto a la renta, correspondiente al 35% de impuesto para aquella proporción que representan los accionistas extranjeros sobre el total de acciones de la Compañía; manteniéndose forma íntegra las demás condiciones, esto es:

- Que para el cálculo de la utilidad, no se considerarán las utilidades o pérdidas provenientes de empresas relacionadas, es decir, filiales, relacionadas, coligadas o cualesquiera en cuyo capital o utilidades la empresa demandada tenga participación.
- Que el monto que resulte de la aplicación del porcentaje del 10% se distribuirá entre los trabajadores que tengan más de 9 meses de antigüedad en la empresa al 31 de diciembre de cada año.



- Que la distribución se hace por un mismo monto, sin considerar las remuneraciones de los trabajadores.
- Que los trabajadores que hubieren prestado servicios solo durante una parte del año y que tengan a lo menos 2 años de antigüedad en la compañía, recibirán la participación a prorrata de los meses en que hubieren prestado servicio efectivo.
- Que el bono se pagará dentro de los 30 días siguientes de aprobado el balance por la Junta General de Accionistas.
- Que el monto que se pague por este concepto es imputable a cualquier otro régimen que se establezca por ley de participación de utilidades, que no sea la gratificación legal.
- Que el beneficio solo alcanza al 10% de las utilidades finales, por lo que se entienden ahí incluidos los incrementos previsionales.

UNDÉCIMO: *Del segundo hecho controvertido.* El segundo hecho controvertido en estos autos es el siguiente, a saber, “si se cumplen los requisitos que hacen procedente la participación en utilidades. En su caso, si la demandada adeuda alguna suma de dinero por este concepto”. Al respecto, cabe mencionar que según el análisis que se viene de realizar, en cuanto se ha determinado que la cláusula décimo tercera contenía una obligación meramente potestativa y por tanto nula, no es posible realizar el análisis de si se reúnen los requisitos y si entonces la demandada pagó de forma íntegra. Lo primero, por cuanto ha quedado asentado que los requisitos no se encontraban redactados de forma clara, de tal manera que no significaban una obligación determinada, quedando al arbitrio de la parte empleadora descontar “*cualquier otro cargo*”.

En segundo lugar, como corolario de lo anterior, resulta evidente que entonces, al modificar la base de cálculo, no es posible tener por cumplida de forma íntegra la obligación. Máxime si ha de dejarse establecido que la parte



demandada no ha acompañado toda la documentación laboral que permite determinar de forma fehaciente cuánto es lo que le correspondía a cada trabajador. Ello, pues dicha información no ha podido ser obtenida de los libros de remuneraciones, desde que no aporta información íntegra; así tampoco los contratos acompañados, pues algunos de ellos se encuentran repetidos y no calzan con el número indicado por el testigo el Sr. Montano, respecto de cuáles serían todos los trabajadores beneficiarios del bono. Lo anterior, dado que ha de recordarse que si bien la presenta acción ha sido incoada por el Sindicato N°1, de la documental aportada por la demandada, es posible desprender que también dicho beneficio existe para el otro sindicato de la empresa. De ahí que resultaba esencial contar con la información, no solo respecto de los asociados, sino de todos los trabajadores potencialmente beneficiados, a efectos de corroborar si la división del total a repartir estaba correctamente realizada. A lo anterior se le abona, como ya se ha señalado, que no fue exhibido el anexo de liquidación de remuneración previsto en el artículo 54 bis del Código del Trabajo.

DUODÉCIMO: *De la excepción de compensación.* La parte demandada en su contestación opuso excepción de compensación respecto de cualquier suma a que eventualmente pudiere ser condenada a pagar a cada uno de los actores por concepto de participación de utilidades, dicha excepción es, respecto de cada uno de los demandantes, por la suma de \$3.190.451. Salvo respecto de los siguientes actores: El demandante Ernesto Concha Mora, contra quien se opone excepción de compensación por \$3.129.775; el demandante Jorge Devia Catalán, por la suma \$2.462.338; el demandante Alex Carrillo Sandoval, por la suma \$2.462.338; y el demandante Nelson Avendaño Burgos, contra quien se opone excepción de compensación por \$1.191.144. Lo anterior, por cuanto dichas sumas fueron pagadas a los demandantes por concepto de participación de utilidades devengadas en los años 2018, 2019 y 2020, y las deudas recíprocas son líquidas y actualmente exigibles.



Al respecto, es menester señalar que la compensación es un modo de extinguir las obligaciones contemplada en el Título XVII del Código Civil, en los artículos 1655 y siguientes. De dichas normas es posible desprender sus requisitos, siendo éstos que ambas partes sean deudoras una y otras, siempre que dichas obligaciones 1) sean de dinero o de cosas fungibles o indeterminadas de igual género y calidad; 2) sean deudas líquidas; y 3) sean ambas actualmente exigibles.

Pues bien, según se desprende de lo explicado en los motivos anteriores, en lo resolutivo del fallo se declarará la nulidad de aquella parte de la cláusula que contenía una obligación meramente potestativa, otorgando una nueva base para su cálculo, excluyendo dicha obligación. Por otro lado, como se explicó en el motivo anterior, la parte demandada no acompañó toda la documental que permita a esta magistratura realizar un cálculo fehaciente del monto al que asciende el bono por cada trabajador, respecto de cada uno de los ejercicios. Así las cosas, la obligación que se declarará en estos autos no podrá ser compensada, desde que no es actualmente líquida. De ahí que se rechazará la excepción de compensación.

DÉCIMO TERCERO: *De la prueba.* Toda la prueba ha sido analizada conforme las reglas de la sana crítica, y el restante material probatorio que no ha sido referido de forma expresa con antelación, no desvirtúa lo expuesto y concluido.

DÉCIMO CUARTO: *De las costas.* Al no resultar completamente vencida la demandada, no será condenada en costas.

Por estas consideraciones y atendido además lo dispuesto en los artículos 3, 7, 8, 9, 41, 63, 320, 446, 452, 453, 455, 456, 459, y demás pertinentes del Código del Trabajo; artículo 1560 y siguientes del Código Civil y demás normas pertinentes, **se declara:**



I. SE ACOGE PARCIALMENTE la demanda interpuesta por SINDICATO DE TRABAJADORES N°1 DE LA EMPRESA COBRE CERRILLOS S.A en contra de empresa COBRE CERRILLOS S.A. solo en cuanto:

- a. Se declara NULA la obligación contenida en la cláusula décimo tercera, relativa a la participación de utilidades, bajo la fórmula de *“y cualquier otro tipo de cargo contra los resultados del ejercicio”*, por constituir una obligación meramente potestativa dependiente de la voluntad del deudor (empleador), según lo prevé el artículo 1478 del Código Civil.
- b. En consecuencia, se declara el derecho de los demandantes, en tanto socios de SINDICATO DE TRABAJADORES N°1 DE LA EMPRESA COBRE CERRILLOS S.A., a percibir el remanente por concepto de lo dispuesto en la cláusula décimo tercera, relativa a la participación de utilidades, contenida en el contrato colectivo de 2018, con exclusión a la obligación declarada nula.
- c. En efecto, la fórmula de cálculo, excluida la obligación declarada nula, debe contemplar el 10% de la “utilidad final” consignada en el balance de la compañía, aprobada por la Junta General de Accionistas y a ello, debe rebajársele el impuesto a la renta, correspondiente al 35% de impuesto para aquella proporción que representan los accionistas extranjeros sobre el total de acciones de la Compañía; manteniéndose forma íntegra las demás condiciones, esto es:
 - i) Que para el cálculo de la utilidad, no se considerarán las utilidades o pérdidas provenientes de empresas relacionadas, es decir, filiales, relacionadas,



coligadas o cualesquiera en cuyo capital o utilidades la empresa demandada tenga participación.

- ii) Que el monto que resulte de la aplicación del porcentaje del 10% se distribuirá entre los trabajadores que tengan más de 9 meses de antigüedad en la empresa al 31 de diciembre de cada año.
 - iii) Que la distribución se hace por un mismo monto, sin considerar las remuneraciones de los trabajadores.
 - iv) Que los trabajadores que hubieren prestado servicios solo durante una parte del año y que tengan a lo menos 2 años de antigüedad en la compañía, recibirán la participación a prorrata de los meses en que hubieren prestado servicio efectivo.
 - v) Que el bono se pagará dentro de los 30 días siguientes de aprobado el balance por la Junta General de Accionistas.
 - vi) Que el monto que se pague por este concepto es imputable a cualquier otro régimen que se establezca por ley de participación de utilidades, que no sea la gratificación legal.
 - vii) Que el beneficio solo alcanza al 10% de las utilidades finales, por lo que se entienden ahí incluidos los incrementos previsionales.
- II. Se RECHAZA en lo demás la demanda.
- III. Se RECHAZA la excepción de compensación.
- IV. Cada parte pagará sus costas.
- V. Regístrese, y archívense los antecedentes en su oportunidad, quedando las partes notificadas con esta fecha.



RIT O-4983-2021

RUC 21- 4-0354591-8

**Dictada por DENNYS CONSTANZA ARAYA CABEZAS, Jueza Suplente
Titular del Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.**



FXVWxDJHFWQ

A contar del 11 de septiembre de 2022, la hora visualizada corresponde al horario de verano establecido en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información consulte <http://www.horaoficial.cl>